



TERCERA SECCION

ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE
ZARAGOZA



PERIODICO OFICIAL

TOMO CXXVII

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, viernes 27 de noviembre de 2020

número 95

REGISTRADO COMO ARTÍCULO DE SEGUNDA CLASE EL DÍA 7 DE DICIEMBRE DE 1921.

FUNDADO EN EL AÑO DE 1860

LAS LEYES, DECRETOS Y DEMÁS DISPOSICIONES SUPERIORES SON OBLIGATORIAS POR EL HECHO
DE PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO

MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS
Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza

JOSÉ MARÍA FRAUSTRO SILLER
Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial

ROBERTO OROZCO AGUIRRE
Subdirector del Periódico Oficial

I N D I C E

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

DECRETO 784.- Se reforma la fracción XVI y XVIII del artículo 3 y se reforman los artículos 15 fracción III y 17 fracción VI de la Ley para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación en el Estado de Coahuila de Zaragoza; Se reforman los artículos 93 párrafo segundo apartado B fracción V y 94 apartado B fracción VII del Código Penal de Coahuila de Zaragoza; Se reforman los artículo 20 párrafo segundo y 169 fracción III numeral 7 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza; Se reforman los artículos 9 fracción V y 48 fracción VI de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza; Se reforman los artículos 5 fracción VIII, 18 fracción IV y 35 fracción X de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila de Zaragoza; Se reforma el artículo 6 fracción IV de la Ley de Asistencia Social y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza; Se reforma el artículo 15 Bis párrafo primero fracción VI de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Coahuila de Zaragoza; Se reforman los artículos 144 párrafo tercero y 147 fracción V de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Coahuila de Zaragoza; Se reforman los artículos 7 párrafo sexto, 12 párrafo tercero, 82 párrafo primero, 85 párrafo segundo y 145 párrafo tercero fracción IV de la Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza; Se reforma el artículo 82 BIS párrafo tercero fracción IV de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila De Zaragoza; Se reforman los artículos 41 párrafo primero, 45 párrafo segundo, 53 fracción XIII y 258 párrafo cuarto de la Ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del Estado de Coahuila de Zaragoza; Se reforma el artículo 19 párrafo segundo de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza; Se reforma el artículo 5 párrafo primero fracción IV de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de Coahuila de Zaragoza; Se reforma el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Estatal de Educación; Se reforma el artículo 53 de la Ley Estatal de Salud.

DECRETO 787.- Se adiciona un octavo párrafo con 6 fracciones al artículo 182, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.	12
DECRETO 788.- Se reforman: la fracción VIII del artículo 48, el artículo 168, los párrafos primero, segundo, tercero, cuarto y sexto del artículo 182, el artículo 190, los párrafos primero, segundo y tercero, y las fracciones I y II del artículo 204; se adiciona un séptimo párrafo al artículo 182 y un tercer párrafo al artículo 190, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza; Se reforma el primer párrafo del artículo 133; se adiciona un segundo y tercer párrafo al artículo 133, del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.	13
DECRETO 789.- Se crea la Ley de Vida Silvestre para el Estado de Coahuila de Zaragoza.	16
DECRETO 790.- Se reforman las fracciones III y IV del artículo 42; se adicionan la fracción XXXIII al artículo 3 y la fracción VIII al artículo 42, de la Ley para la Localización, Recuperación e Identificación Forense de Personas del Estado de Coahuila de Zaragoza.	32
DECRETO 791.- Se reforman la fracción XVI del artículo 2º, la fracción II del artículo 4º y el artículo 19 de la Ley del Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de Coahuila de Zaragoza.	33
DECRETO 792.- Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreón, Coahuila de Zaragoza, a celebrar un Convenio de Colaboración por un período de 15 años con la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda Delegación Comarca Lagunera (CANADEVI) para la colocación de un estacionamiento verde en una superficie de 1,046.91 metros cuadrados ubicados en el Fraccionamiento Arboledas Primera Etapa, de ese municipio; lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el artículo 67 fracción IX, inciso b de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como el artículo 102 fracción I, numeral 11, del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.	35
DECRETO 793.- Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreón, Coahuila de Zaragoza, para celebrar un Contrato de Concesión de Uso de Suelo y exclusividad de publicidad relativo a la construcción de un Puente Peatonal en el área de la Calzada Juan Pablo II antes antigua Carretera a San Pedro, colindante al predio que ocupa las instalaciones de la Planta Industrial Combugas Aeropuerto, con la persona moral “Combustibles y Gases de Torreón S.A. DE C.V.”, por conducto de su representante legal, por una vigencia de hasta 15 años.	37
DECRETO 794.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, a desincorporar del dominio público municipal, dos bienes inmuebles con una superficie total de 13,265.98 m2.; el primero identificado como Lote 1 de la Manzana 24 Sector G, con una superficie de 10,133.54 m2., y el segundo identificado como área vial del Circuito Nidias, con una superficie de 3,132.44 m2., ambos ubicados en el Fraccionamiento “Santa Bárbara” de esa ciudad, con el fin de permutarlo por otro bien inmueble, identificado como fracción de terreno AB5-6, con una superficie de 8,499.57 M2., ubicado en el Fraccionamiento Santa Bárbara de esa ciudad, a favor del C. Juan Enrique Ramos Salas, con objeto de compensar su predio por las obras públicas ejecutadas para equipamiento urbano.	38
DECRETO 797.- Se reforma el artículo 53 de la Ley Estatal de Salud.	40
DECRETO 802.- Se crea la Ley de Responsabilidad Ambiental del Estado de Coahuila de Zaragoza.	41
DECRETO 803.- Se adiciona la fracción XIX al artículo 86 del Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila.	58
DECRETO 805.- Se valida el acuerdo aprobado por el R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, para enajenar a título gratuito, un inmueble con una superficie de 7,966.96 M2., ubicado en la manzana 10 del fraccionamiento “Santa Bárbara” de esta ciudad, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual se desincorporo con Decreto número 618 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 26 de junio de 2020.	60
DECRETO 806.- Se valida el acuerdo aprobado por el R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, para enajenar a título gratuito, un inmueble con una superficie de 10,710.03 M2., ubicado en el lote 1 de la manzana 23 del Fraccionamiento urbano denominado “Hacienda el Cortijo” de esta ciudad, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual se desincorporo con Decreto número 619 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 26 de junio de 2020.	61
DECRETO 807.- Se valida el acuerdo aprobado por el R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, para enajenar a título gratuito, un inmueble con una superficie de 4,184.88 M2., ubicado en el fraccionamiento “Fundadores V Sector” de esta ciudad, a favor del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, para ser destinado a la Secretaría de Educación, el cual se desincorporo con Decreto número 644 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 10 de julio de 2020.	63

Artículo 53.- Para los efectos del artículo anterior, en los centros de población, se constituirán comités de salud que serán presididos preferentemente por personas que ejerzan la profesión de médico, cuanto más si acreditan una experiencia mínima de 5 años, e integrados por núcleos de población urbana, rural o indígena los cuales tendrán como objetivo la participación en el mejoramiento y vigilancia de los servicios de salud de sus localidades y promover mejores condiciones ambientales que favorezcan la salud de la población, así como la organización de la comunidad para obtener su colaboración en la construcción de obras e infraestructura básica y social y mantenimiento de unidades.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

DADO en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los cuatro días del mes de noviembre del año dos mil veinte.

**DIPUTADO PRESIDENTE
MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO
(RÚBRICA)**

**DIPUTADA SECRETARIA
VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ
(RÚBRICA)**

**DIPUTADA SECRETARIA
DIANA PATRICIA GONZALEZ SOTO
(RÚBRICA)**

IMPRÍMASE, COMUNÍQUESE Y OBSÉRVESE
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 26 de noviembre de 2020.

**EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
ING. MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS
(RÚBRICA)**

**EL SECRETARIO DE GOBIERNO
ING. JOSÉ MARÍA FRAUSTRO SILLER
(RÚBRICA)**



EL C. ING. MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A SUS HABITANTES SABED:

QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA;

DECRETA:

NÚMERO 802.-

ARTÍCULO PRIMERO.- Se crea la **Ley de Responsabilidad Ambiental del Estado de Coahuila de Zaragoza**, para quedar como sigue:

LEY DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

TÍTULO PRIMERO DE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular en el Estado de Coahuila de Zaragoza la responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados al ambiente, la prevención, reparación y compensación de dichos daños cuando estos sean exigibles mediante procesos jurisdiccionales locales y mecanismos alternativos de solución de controversias, los procedimientos administrativos y aquellos que correspondan a la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.

Los preceptos de este ordenamiento son reglamentarios del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y buscan proteger, preservar y restaurar el medio ambiente y el equilibrio ecológico, para garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de toda persona, así como el derecho fundamental a la responsabilidad generada por el daño y el deterioro ambiental.

El régimen de responsabilidad ambiental reconoce que el daño ocasionado al ambiente es independiente del daño patrimonial sufrido por los propietarios de los elementos y recursos naturales. Reconoce que el desarrollo sustentable debe considerar los valores económicos, sociales y ambientales.

Las disposiciones previstas en la presente ley, tiene como finalidad determinar la responsabilidad ambiental a través del procedimiento jurisdiccional colectivo regulado por la legislación civil del Estado, sin menoscabo de los procesos para determinar otras formas de responsabilidad que procedan en términos patrimoniales, administrativos o penales.

Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entiende por:

- I. Cadena causal:** Secuencia de influencias de causa y efecto de un fenómeno que se representa por eslabones relacionados;
- II. Criterio de equivalencia:** Lineamiento obligatorio para orientar las medidas de reparación y compensación ambiental, que implica restablecer los elementos y recursos naturales o servicios ambientales por otros de las mismas características;
- III. Daño al ambiente:** La pérdida, cambio, deterioro, menoscabo, afectación o modificación adversos y mensurables de los hábitat, ecosistemas, elementos y recursos naturales, de sus condiciones químicas, físicas o biológicas, de las relaciones de interacción que se dan entre estos, así como de los servicios ambientales que proporcionan, que es resultado de una obra, actividad u omisión regulada por las leyes ambientales estatales.

Para esta definición se estará a lo dispuesto por la excepción prevista en el artículo 6 de esta ley;

- IV. Daño indirecto:** Es aquel daño que en una cadena causal no constituye un efecto inmediato del acto u omisión que es imputado a una persona en términos de esta ley.

No se considerará que existe un daño indirecto, cuando entre la conducta imputada y el resultado que se le atribuye, sobrevenga el hecho doloso de un tercero que resulte completamente determinante del daño. Esta excepción no operará si el tercero obra por instrucciones, en representación o beneficio, con conocimiento, consentimiento o bajo el amparo de la persona señalada como responsable.

Los daños indirectos regulados por la presente ley, se referirán exclusivamente a los efectos ambientales de la conducta imputada al responsable;

- V. Estado Base:** Condición en la que se habrían hallado los hábitats, los ecosistemas, los elementos y recursos naturales, las relaciones de interacción y los servicios ambientales, en el momento previo inmediato al daño y de no haber sido este producido;
- VI. Fondo:** El Fondo Estatal de Responsabilidad Ambiental;
- VII. Ley:** Ley de Responsabilidad Ambiental del Estado de Coahuila de Zaragoza;
- VIII. Mecanismos Alternativos:** Los mecanismos alternativos de solución de controversias, tales como la mediación, la conciliación y los demás que permitan a las personas prevenir conflictos, o en su caso, solucionarlos a través de la composición amigable;
- IX. Procuraduría:** La Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza;
- X. Sanción Económica:** Pago impuesto por el órgano jurisdiccional para penalizar económicamente una conducta ilícita dolosa, con la finalidad de lograr una prevención general y especial e inhibir en el futuro comportamientos prohibidos;
- XI. Secretaría:** La Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; y
- XII. Servicios Ambientales:** Las funciones que desempeña un elemento o recurso natural en beneficio de otro elemento o recurso natural, los hábitat, ecosistema o sociedad.

Asimismo, se estará a las definiciones previstas en la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, las leyes ambientales de orden general, federal, estatal y los tratados internacionales de los que México sea parte.

Artículo 3. El régimen de responsabilidad ambiental y las definiciones de esta ley, así como la forma, prelación, alcance, niveles y alternativas de la reparación y compensación del daño al ambiente que en ella se prevén, serán aplicables a:

- I. Los convenios, procedimientos y actos administrativos suscritos o sustanciados de conformidad a las leyes ambientales estatales y los tratados internacionales de los que México sea parte;
- II. El procedimiento jurisdiccional por responsabilidad ambiental;
- III. La interpretación de la ley penal en materia de delitos contra el medio ambiente y el equilibrio ecológico; y
- IV. Los mecanismos alternativos de solución de controversias previstos en las leyes aplicables en la materia.

Artículo 4. La acción y el procedimiento para hacer valer la responsabilidad ambiental, podrá tramitarse con independencia de que la misma conducta genere otras responsabilidades en el ámbito administrativo, penal o de cualquier otra naturaleza.

Artículo 5. Obra dolosamente quien, conociendo la naturaleza dañosa de su acto u omisión, o previendo como posible un resultado dañoso de su conducta, quiere o acepta realizar dicho acto o acepte el resultado al omitir la acción que lo evitaría, pudiendo y debiendo jurídicamente realizarla.

Artículo 6. No se considerará que existe daño al ambiente cuando los menoscabos, pérdidas, afectaciones, modificaciones o deterioros no sean adversos en virtud de haber sido expresamente manifestados por el responsable y explícitamente identificados, delimitados en su alcance, evaluados, mitigados y compensados mediante condicionantes, y autorizados por la Secretaría, previamente a la realización de la conducta que los origina, mediante la evaluación del impacto ambiental, o algún otro tipo de autorización análoga expedida por la Secretaría.

La excepción prevista en el presente artículo no operará cuando se incumplan los términos o condiciones de la autorización expedida por la autoridad.

Artículo 7. En lo no previsto por esta ley, se aplicarán las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza, el Código Civil para el Estado de Coahuila, el Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones que resulten aplicables, siempre que no contravengan lo dispuesto en esta ley.

CAPÍTULO II

DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

SECCIÓN PRIMERA

DE LOS DAÑOS OCASIONADOS AL MEDIO AMBIENTE

Artículo 8. Toda persona física o jurídica que con su acción u omisión ocasione directa o indirectamente un daño al ambiente en el ámbito de competencia estatal, será responsable y estará obligada a la reparación de los daños y, cuando la reparación no sea posible, a la compensación ambiental que proceda, en los términos de la presente ley.

También estará obligada a realizar las acciones necesarias para evitar que se incremente el daño ocasionado al ambiente.

Artículo 9. La responsabilidad por daños ocasionados al ambiente en el ámbito estatal será subjetiva, y nacerá de actos u omisiones ilícitos, con independencia de si el responsable actuó dolosamente o por negligencia.

Para los efectos de esta ley, se entenderá que obra ilícitamente el que realiza una conducta activa u omisiva en contravención a las disposiciones legales, reglamentarias, a las normas oficiales mexicanas, normas técnicas estatales y a las autorizaciones, licencias, permisos o concesiones expedidas por la Secretaría u otras autoridades.

Artículo 10. La responsabilidad objetiva nace por el daño ocasionado al medio ambiente y será exigible con independencia de que exista o no ilicitud, culpa o negligencia.

Artículo 11. La reparación del daño será la obligación primaria derivada del daño ambiental. La compensación ambiental procederá por excepción, en los casos previstos en el artículo 13 de esta ley.

La reparación de los daños ocasionados al ambiente consistirá en restituir a su estado base los hábitat, ecosistemas, elementos y recursos naturales, sus condiciones químicas, físicas o biológicas y las relaciones de interacción que se dan entre éstos, así como los servicios ambientales que proporcionan, mediante la restauración, restablecimiento, tratamiento, recuperación o remediación, debiendo realizarse en el lugar en el que fue producido el daño.

Los propietarios o poseedores de los inmuebles en los que se haya ocasionado un daño al ambiente deberán permitir su reparación, de conformidad a esta ley. El incumplimiento a dicha obligación dará lugar a la imposición de medios de apremio y a la responsabilidad penal que corresponda.

Artículo 12. Los propietarios y poseedores que resulten afectados por las acciones de reparación del daño al ambiente producido por terceros, tendrán derecho de reclamar la reparación del daño a la persona que resulte responsable por los daños y perjuicios que se les ocasionen de conformidad con las disposiciones aplicables.

Artículo 13. La compensación ambiental procederá por excepción en los siguientes casos:

- I. Cuando resulte material o técnicamente imposible la reparación total o parcial del daño; o
- II. Cuando se actualicen los tres supuestos siguientes:
 - a) Que los daños al ambiente hayan sido producidos por una obra o actividad ilícita que debió haber sido objeto de evaluación y autorización previa en materia de impacto ambiental o similar;
 - b) Que la Secretaría haya evaluado posteriormente en su conjunto los daños producidos ilícitamente, y las obras y actividades asociadas a esos daños que se encuentren aún pendientes de realizar en el futuro; y
 - c) Que la Secretaría expida una autorización posterior al daño, al acreditarse plenamente que tanto las obras y las actividades ilícitas, como las que se realizarán en el futuro, resultan en su conjunto sustentables, y jurídica y ambientalmente procedentes en términos de lo dispuesto por las leyes ambientales estatales y los instrumentos de política ambiental.

En los casos referidos en la fracción II del presente artículo, se impondrá obligadamente la sanción económica sin los beneficios de reducción de los montos previstos por esta ley. Asimismo, se iniciarán de manera oficiosa e inmediata los procedimientos de responsabilidad administrativa y penal a las personas responsables.

Las autorizaciones administrativas previstas en el inciso c) de la fracción II de este artículo no tendrán validez, sino hasta el momento en el que el responsable haya realizado la compensación ambiental, que deberá ser ordenada por la Secretaría mediante condicionantes en la autorización de impacto ambiental.

Los daños patrimoniales y los perjuicios sufridos podrán reclamarse de conformidad con el Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Artículo 14. La compensación ambiental podrá ser total o parcial. En este último caso, la misma será fijada en la proporción que no haya sido posible restaurar, restablecer, recuperar o remediar el bien, las condiciones o relación de interacción de los elementos naturales dañados.

Artículo 15. Para la reparación del daño y la compensación ambiental se aplicarán los niveles y las alternativas previstos en este ordenamiento y las leyes ambientales estatales. La falta de estas disposiciones no será impedimento ni eximirá de la obligación de restituir lo dañado a su estado base.

Artículo 16. La compensación ambiental consistirá en la inversión o las acciones que el responsable haga a su cargo, que generen una mejora ambiental, sustitutiva de la reparación total o parcial del daño ocasionado al ambiente, según corresponda, y equivalente a los efectos adversos ocasionados por el daño.

La inversión o acciones deberán hacerse en el inmueble, espacio, ecosistema o región ecológica en donde se hubiese ocasionado el daño. De resultar esto materialmente imposible, la inversión o las acciones se llevarán a cabo en un lugar alternativo, vinculado ecológica y geográficamente al sitio dañado. En este último caso serán aplicables los criterios sobre sitios prioritarios de reparación de daños, que en su caso expida la Secretaría.

El responsable podrá cumplir con la obligación prevista en el presente artículo, mediante la contratación de terceros.

Artículo 17. La Secretaría está facultada para realizar subsidiariamente por razones de urgencia o importancia, la reparación inmediata de los daños al ambiente que ocasionen terceros. Dicha reparación podrá hacerse con cargo al Fondo previsto por la presente ley.

En estos casos la administración pública estatal, a través de la Procuraduría, podrá demandar al responsable la restitución de los recursos económicos erogados, incluyendo los intereses legales correspondientes, los que serán reintegrados al Fondo.

Artículo 18. Las personas jurídicas serán responsables del daño al ambiente ocasionado por sus representantes, administradores, gerentes, directores, empleados y quienes ejerzan dominio funcional de sus operaciones, cuando sean omisos o actúen en el ejercicio de sus funciones, en representación o bajo el amparo o beneficio de la persona jurídica, o bien, cuando ordenen o consientan la realización de las conductas dañosas.

Las personas que se valgan de un tercero, lo determinen o contraten para realizar la conducta causante del daño, serán solidariamente responsables, salvo en el caso de que se trate de la prestación de servicios de confinamiento de residuos de manejo especial realizada por empresas autorizadas por la Secretaría.

No existirá responsabilidad alguna, cuando el daño al ambiente tenga como causa exclusiva un caso fortuito o fuerza mayor.

Artículo 19. Los daños ocasionados al ambiente serán atribuibles a la persona física o jurídica que omita impedirlos, si esta tenía el deber jurídico de evitarlos. En estos casos, se considerará que el daño es consecuencia de una conducta omisiva, cuando se determine que el que omita impedirlo tenía el deber de actuar para ello derivado de una ley, de un contrato, de su calidad de garante o de su propio actuar precedente.

Artículo 20. Cuando se acredite que el daño o afectación, fue ocasionado dolosamente por dos o más personas, y no fuese posible la determinación precisa del daño aportado por cada responsable, todas serán responsables solidariamente de la reparación o compensación que resultare, sin perjuicio, en su caso, del derecho de repetición entre sí.

SECCIÓN SEGUNDA

DE LOS DAÑOS Y AFECTACIONES A LA SALUD E INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS

Artículo 21. Las personas físicas o jurídicas que, con su acción u omisión, ocasionen directa o indirectamente un daño a la salud o afectación a la integridad de las personas, como resultado de la liberación de contaminantes al ambiente serán responsables y estarán obligadas al pago de una indemnización de conformidad con el presente Capítulo.

Se entiende por afectación a la integridad de la persona la introducción no consentida a su organismo, de uno o más contaminantes o la combinación o derivación de ellos, que resulte directa o indirectamente de la exposición a contaminantes liberados ilícitamente al ambiente.

Artículo 22. La responsabilidad por daño ocasionado a la salud de las personas con contaminantes liberados al ambiente será objetiva y exigible con independencia de que exista o no ilicitud, culpa o negligencia.

La responsabilidad por afectación a la integridad de las personas por la liberación de contaminantes al ambiente será subjetiva y nacerá de actos u omisiones ilícitos.

Artículo 23. Se absolverá total o parcialmente al demandado del pago de la indemnización prevista en el presente Capítulo, si quien la reclama contribuyó al daño ambiental por acción u omisión dolosa, o negligencia inexcusable.

Artículo 24. La reparación del daño a la salud de la persona por la liberación de contaminantes a la atmósfera se hará mediante la indemnización de acuerdo a las disposiciones aplicables del Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y comprenderá además el pago de:

- I. La asistencia médica y quirúrgica;
- II. La hospitalización;

- III. Los medicamentos y materiales de curación;
- IV. Los aparatos de prótesis y ortopedia necesarios; y
- V. La rehabilitación.

Lo anterior, durante el tiempo necesario para el restablecimiento de la salud del afectado, y sin menoscabo de la posibilidad de que se acredite la necesidad de prestaciones superiores o distintas, durante el procedimiento jurisdiccional por responsabilidad ambiental.

La reparación del daño a la salud de las personas que resulte procedente en términos de esta ley será preferente respecto a las indemnizaciones patrimoniales que correspondan a terceros en términos de la legislación civil.

Artículo 25. La compensación por la afectación a las personas por contaminantes liberados al ambiente consistirá en el pago de una cantidad en dinero por el equivalente al valor diario de mil quinientos a cinco mil unidades de medida y actualización en el momento de dictar sentencia.

Para cuantificar el monto del pago, se tomará en cuenta el grado de riesgo ocasionado con la liberación y la cantidad de contaminantes que se hayan introducido al organismo, el tiempo de permanencia en éste, la situación económica del responsable y el carácter intencional o negligente de la violación de la ley.

Cuando la afectación ocasionada a las personas tenga como resultado la posibilidad de desarrollar alguna enfermedad o afectación adversa futura en la salud de la persona, el monto de la compensación se incrementará en una mitad más en sus parámetros mínimo y máximo.

Artículo 26. El monto de la condena por indemnización previsto en este Capítulo se cubrirá en una sola exhibición. En caso de muerte, la indemnización o compensación corresponderá a la sucesión del afectado.

Artículo 27. Toda persona que haya recibido un daño o una afectación por contaminantes liberados al ambiente, tiene derecho e interés jurídico para reclamar el pago de la indemnización o compensación correspondiente por responsabilidad ambiental, así como las erogaciones hechas para acreditar la responsabilidad prevista en la presente ley, siendo preferente esta última en el pago de las sanciones económicas impuestas al responsable.

SECCIÓN TERCERA DE LA SANCIÓN ECONÓMICA

Artículo 28. Además de las obligaciones previstas en este capítulo, cuando el daño sea ocasionado por un acto u omisión independientemente de su proceder doloso o negligente, la persona responsable estará obligada a pagar una sanción económica.

La sanción económica será accesoria a la reparación o compensación del daño, así como a la indemnización que en su caso proceda y consistirá en el pago por un monto equivalente:

- I. El valor diario de trescientas a cincuenta mil unidades de medida y actualización vigentes al momento de imponer la sanción, cuando el responsable sea una persona física; y
- II. El valor diario de mil a seiscientos mil unidades de medida y actualización vigentes al momento de imponer la sanción, cuando la responsable sea una persona jurídica.

Artículo 29. Si el responsable acredita haber realizado el pago de una multa administrativa impuesta por la Procuraduría, como consecuencia a la realización de la misma conducta ilícita que dio origen a su responsabilidad ambiental, el juez tomará en cuenta dicho pago integrándolo en el cálculo del monto de la sanción económica, sin que esta pueda exceder el límite previsto para el caso en la presente ley.

No podrá imponerse la sanción económica a la persona física o jurídica que previamente haya sido sancionada en el ámbito penal, en razón de haber realizado la misma conducta ilícita que da origen a su responsabilidad ambiental.

Artículo 30. Siempre que se reclame ante el órgano jurisdiccional competente la responsabilidad ambiental, se entenderá por demandada la imposición de la sanción económica. En ningún caso el juez podrá dejar de condenar al responsable a este pago, salvo en los casos previstos expresamente o bien, cuando los daños ocasionados al ambiente provengan de una conducta lícita o exista el reconocimiento judicial de algún acuerdo reparatorio voluntario derivado de los mecanismos alternativos de resolución de controversias previstos por esta ley.

Artículo 31. La sanción económica la determinará el juez competente tomando en cuenta la capacidad económica de la persona responsable para realizar el pago, así como los límites, requisitos y garantías previstos en su favor por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la gravedad del daño ocasionado y el carácter intencional o negligente de su conducta, asegurándose que se neutralice el beneficio económico obtenido, si lo hubiere.

CAPÍTULO III

DE LA PREVENCIÓN DEL DAÑO AL AMBIENTE EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL

Artículo 32. La responsabilidad de prevenir los daños al ambiente corresponde a toda persona física y jurídica que realiza actividades reguladas por la legislación ambiental estatal.

Las personas jurídicas deberán observar el debido control en su organización con el fin de prevenir actos y omisiones que ocasionen un riesgo o un daño al ambiente.

Artículo 33. El cumplimiento con el debido control organizacional en materia de daño al ambiente tendrá los beneficios siguientes:

- A) Los montos mínimos y máximos de la sanción económica prevista para una persona jurídica en términos de esta ley se reducirán a su tercera parte cuando se acrediten plenamente la implementación y funcionamiento real de los siguientes factores relevantes para la prevención del daño:
 - I. Que dicha persona jurídica no haya sido sentenciada en los últimos tres años en términos de lo dispuesto por esta ley; ni sea reincidente en términos de lo dispuesto por las leyes ambientales estatales;

- II.** Que sus empleados, representantes, y quienes ejercen cargos de dirección, mando o control en su estructura u organización, no hayan sido sentenciados por delitos contra el ambiente o la gestión ambiental o infracciones a la legislación ambiental estatal, cometidos por sí o bajo el amparo de la persona jurídica para la que laboran, en su beneficio o con sus medios. La persona jurídica deberá expedir una política en materia de recursos humanos que garantice lo anterior;
 - III.** Contar con un seguro de responsabilidad por daño al ambiente; y
 - IV.** Haber realizado de manera voluntaria, a través de la auditoría ambiental regulada por la legislación ambiental estatal, el examen metodológico de sus operaciones, respecto de la contaminación y el riesgo que generan, así como el grado de cumplimiento de la normatividad ambiental y de los parámetros internacionales y de prácticas de operación e ingeniería aplicables, obteniendo el certificado respectivo.
- B)** La sanción económica prevista en la presente ley para una persona jurídica quedará excluida y los jueces competentes no podrán imponerla en sentencia, cuando dicha persona acredite haber cumplido con el debido control organizacional a través de la implementación real y efectiva de los siguientes hechos y acciones:
- I.** Que el máximo órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la producción del daño al ambiente, modelos de organización, certificación, gestión y prevención que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas y adecuadas para prevenir daños ambientales y para reducir de forma significativa el riesgo de su producción;
 - II.** Que en la organización ha ejercido la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de organización, gestión y prevención, y que su implementación ha sido confiada a un órgano de control con poderes autónomos de iniciativa y de control;
 - III.** Que los autores individuales del daño al ambiente hayan eludido los modelos de organización y prevención de la organización;
 - IV.** Que se han identificado las actividades de la organización en cuyo ámbito pueden ocasionarse daños al ambiente, se ha realizado un análisis y valoración de los riesgos de su producción;
 - V.** Que se han identificado, documentado y socializado las actividades internas de los empleados de la organización que resultan preocupantes por constituir actos u omisiones que incrementan el riesgo de daño al ambiente, así como las actividades inusuales de los terceros relacionados con la organización que representan el mismo riesgo;
 - VI.** Que se han adoptado protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la organización para prevenir el daño al ambiente;
 - VII.** Que se han dispuesto recursos financieros adecuados para impedir la producción de daños al ambiente, así como el compromiso de los órganos directivos o de administración para destinar recursos para la operación del órgano de control ambiental;

- VIII.** Que se ha impuesto mediante los procedimientos internos aprobados por la organización, la obligación aplicable a todos sus miembros de informar al órgano de control las actividades inusuales e internas preocupantes, los riesgos ambientales y los incumplimientos del modelo de prevención de daños al ambiente;
- IX.** Que se ha establecido un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas de prevención de daños al ambiente y las políticas de protección ambiental de la organización y exista evidencia de ello; y
- X.** Que ha realizado una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones y políticas de prevención, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios.

El cumplimiento con el debido control organizacional previsto en el presente artículo presumirá que las infracciones a las leyes ambientales estatales cometidas por las personas jurídicas no son intencionales. En consecuencia, se aplicarán las reducciones en las multas que resulten procedentes.

CAPÍTULO IV

DE LAS PERSONAS LEGITIMADAS PARA RECLAMAR LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

Artículo 34. Se reconoce interés jurídico e interés legítimo, en su caso, para reclamar judicialmente la responsabilidad ambiental o, en su caso, la compensación de los daños ocasionados al ambiente, el pago de la sanción económica, así como las prestaciones a las que se refiere el presente Capítulo a:

- I.** Las personas físicas habitantes de la comunidad afectada por el daño, así como las que tengan domicilio a una distancia igual o menor a veinticinco kilómetros a partir del lugar afectado, por sí o a través de sus representantes;
- II.** Las personas jurídicas privadas mexicanas, sin fines de lucro, cuyo objeto social sea la protección al ambiente en general, o de alguno de sus elementos;
- III.** La Procuraduría; y
- IV.** Los municipios, por sí o en conjunto con la Procuraduría.

Las personas jurídicas referidas en la fracción II de este artículo, deberán acreditar que fueron legalmente constituidas por lo menos tres años antes de la presentación de la demanda por daño ocasionado al ambiente.

Los legitimados en las fracciones I y II de este artículo tendrán además derecho para reclamar el pago de las erogaciones que hayan hecho para acreditar la responsabilidad ambiental.

Artículo 35. Son competentes para conocer y resolver sobre los asuntos de responsabilidad ambiental, los Juzgados de Primera Instancia en materia Civil del Estado de Coahuila de Zaragoza, conforme a la presente ley, al Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables.

DE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN Y COMPENSACIÓN

Artículo 36. Además de lo previsto por el Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, al resolver los asuntos de responsabilidad ambiental, el juez deberá precisar:

- I.** La obligación de reparar ambientalmente el daño que corresponda;
- II.** La obligación de compensar ambientalmente a través de las acciones que procedan, en forma total o parcial;
- III.** Las medidas y acciones necesarias para evitar que se incremente el daño ocasionado al ambiente;
- IV.** El pago de la sanción económica que resulte procedente;
- V.** El importe que corresponda pagar correspondiente a los gastos realizados para acreditar la responsabilidad; y
- VI.** Los plazos para el cumplimiento de las obligaciones del responsable.

Artículo 37. De conformidad a lo previsto por el Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila una vez que cause ejecutoria la sentencia que resulte condenatoria, el juez dará vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés corresponda sobre:

- I.** La forma, términos y niveles de reparación material del daño ambiental ocasionado al ambiente que se propongan para cumplir esas obligaciones;
- II.** La imposibilidad total o parcial de reparar materialmente el daño ambiental, y en consecuencia, la forma, lugar y alcance de la compensación ambiental total o parcial; y
- III.** Los plazos propuestos para el cumplimiento de las obligaciones del responsable.

Si las partes llegaran a un acuerdo respecto a lo previsto en este artículo, podrán formular una propuesta conjunta.

Cuando exista causa justificada por razones de la complejidad técnica o material para dar cumplimiento a lo anterior, el término establecido en el párrafo primero del presente artículo podrá ser prorrogable por el juez hasta por treinta días.

Artículo 38. En la determinación de las medidas de reparación y compensación ambiental se considerará:

- I.** El criterio de equivalencia del recurso o servicio ambiental;
- II.** Las acciones que proporcionen recursos naturales o servicios ambientales del mismo tipo, calidad y cantidad que los dañados;
- III.** Las mejores tecnologías disponibles;

- IV. Su viabilidad y permanencia en el tiempo;
- V. El costo que implica aplicar la medida;
- VI. El efecto en la salud y la seguridad pública;
- VII. La probabilidad de éxito de cada medida;
- VIII. El grado en que cada medida servirá para prevenir daños futuros y evitar riesgos como consecuencia de su aplicación;
- IX. El grado en que cada medida beneficiará al ecosistema dañado;
- X. El grado en que cada medida tendrá en cuenta los correspondientes intereses sociales, económicos y culturales de la localidad;
- XI. El periodo de tiempo requerido para la recuperación de los ciclos biológicos que fueron afectados por el daño causado al ecosistema;
- XII. El grado en que cada una de las medidas logra reparar el lugar que ha sufrido el daño ambiental; y
- XIII. La vinculación geográfica con el lugar dañado.

Artículo 39. Una vez que el juez reciba las propuestas para la reparación del daño o su compensación conforme a lo previsto por la presente ley, requerirá a la Secretaría, para que formule su opinión en relación a la idoneidad y legalidad de las propuestas.

En caso de que una de las partes fuera omisa, se estará a la propuesta de la otra, siempre que esta reciba opinión favorable de la Secretaría.

En caso de que ambas partes sean omisas, o las propuestas no cuenten con la opinión favorable de la Secretaría, se estará a lo que disponga dicha dependencia. Para este efecto, se le requerirá para que formule una propuesta oficial.

Los gastos en los que incurra la Secretaría podrán hacerse con cargo al Fondo. En estos casos la Procuraduría, podrá demandar la restitución de los recursos económicos erogados, incluyendo los intereses legales correspondientes, los que serán reintegrados al Fondo.

Si existiesen diversas alternativas que pudieran generar los mismos resultados positivos de reparación o compensación, se optará por la menos onerosa para el responsable.

Artículo 40. El plazo para el cumplimiento de las obligaciones materia de la presente ley, será fijado por el juez tomando en consideración:

- I. La naturaleza de las obras o actos necesarios para reparar el daño ocasionado al ambiente y en su caso, cumplir con la compensación ambiental;

II. Lo propuesto por las partes; y

III. La opinión o propuesta de la Secretaría.

Artículo 41. La Procuraduría auxiliará a la autoridad judicial en la verificación del cumplimiento de las obligaciones a cargo del responsable.

La Procuraduría informará bimestralmente al juez que conozca del asunto sobre los avances en el cumplimiento de las sentencias. Las partes podrán manifestar lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento o deficiente ejecución de dicha resolución.

Artículo 42. Las sentencias y convenios derivados del procedimiento jurisdiccional de responsabilidad ambiental serán públicos de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Artículo 43. La autoridad jurisdiccional que conozca de las demandas a que hace referencia el presente Capítulo, deberá ordenar a la Procuraduría, a efecto de que imponga inmediatamente las medidas preventivas y correctivas procedentes en el ámbito de sus atribuciones para evitar mayores daños a los causados.

Artículo 44. Los terceros, propietarios o poseedores de los inmuebles en los que se haya ocasionado el daño, estarán obligados a permitir las medidas cautelares que resuelva el órgano jurisdiccional. En todo caso tendrán derecho de repetir respecto a la persona que resulta responsable de ocasionar dichos daños.

CAPÍTULO VI

DEL FONDO ESTATAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

Artículo 45. El Fondo tendrá como objeto el pago de la reparación de los daños que sean ocasionados al ambiente, en los casos que por razones de urgencia o importancia determine la administración pública estatal o en su caso, que el juez determine, además del pago de los estudios e investigaciones este requiera realizar a la Secretaría o la Procuraduría durante el proceso jurisdiccional de responsabilidad ambiental.

La información relativa a la operación del Fondo será pública en términos de lo establecido por la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones que le sean aplicables por su naturaleza y operación.

Artículo 46. El Fondo estará bajo la vigilancia, supervisión y coordinación de la Secretaría, y su patrimonio se integrará con:

I. La sanción económica que se obtenga por responsabilidad ambiental de conformidad con la presente ley; y

II. Los demás recursos que obtenga por cualquier otro concepto.

La Secretaría expedirá las bases y reglas de operación del Fondo, en la que tendrán participación la Procuraduría, las instituciones académicas y las organizaciones sociales relacionadas con la materia.

El Fondo se sujetará a los procedimientos de control, auditoría, transparencia, evaluación y rendición de cuentas que establecen las disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO VII DE LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Artículo 47. Toda persona tiene el derecho de resolver las controversias de carácter jurídico y social que se ocasionen por la producción de daños al ambiente, a través de vías colaborativas en las que se privilegie el diálogo y se faciliten las alternativas de solución que resulten ambiental y socialmente más positivas.

Las personas legitimadas para demandar la responsabilidad ambiental y las personas ambientalmente responsables podrán resolver los términos del conflicto producido por el daño ocasionado al ambiente, mediante los mecanismos alternativos de mediación, conciliación y los demás que sean adecuados para la solución pacífica de la controversia, de conformidad a lo previsto por esta ley y demás disposiciones aplicables. Siempre que no se afecten la moral, los derechos de terceros, ni se contravengan las leyes ambientales estatales, las disposiciones de orden público y los tratados internacionales de los que México sea parte.

Artículo 48. Podrán ser materia de los mecanismos alternativos de solución de controversias, todas o algunas de las diferencias que se susciten entre las personas e instituciones previstas en el artículo anterior en torno a los hechos relativos al daño ocasionado al ambiente, la tutela del derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas, las obligaciones de reparación y compensación ambiental, siempre que no se afecten la moral, los derechos de terceros, ni se contravengan las leyes ambientales estatales, las disposiciones de orden público y los tratados internacionales de los que México sea parte.

Artículo 49. Si durante el procedimiento jurisdiccional por responsabilidad ambiental, y antes de que se dicte sentencia definitiva, se lograra un acuerdo entre las partes mediante el convenio de reparación previsto por la legislación ambiental estatal, las partes lo harán del conocimiento del juez que conozca del procedimiento, de conformidad con las disposiciones aplicables.

El juez dará vista a la Secretaría y la requerirá para que, en un plazo de quince días hábiles, se manifieste sobre los términos del acuerdo, cuidando su idoneidad y el cumplimiento de las disposiciones previstas por esta ley, las leyes ambientales y los tratados internacionales de los que México sea parte.

En caso de que el acuerdo sea incorporado a la sentencia, no se condenará al responsable al pago de la sanción económica prevista en esta ley.

Será causa de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, el incumplimiento del requerimiento en el plazo determinado por el juez en el presente artículo.

Cuando del acuerdo se desprenda que su cumplimiento puede afectar los bienes de un tercero, el juez recabará su conformidad. Si no se obtuviese ésta, requerirá a las partes para que modifiquen los términos de su acuerdo.

Artículo 50. En caso de que resulte procedente en términos del artículo anterior, un acuerdo sobre la reparación o compensación voluntaria del daño ocasionado al ambiente, el juez informará a la Procuraduría para que considere dicho acuerdo, el que se entenderá como cumplimiento de medidas correctivas y de urgente aplicación, siendo procedente la aplicación de los beneficios administrativos de revocación o disminución de las sanciones previstas en la legislación ambiental estatal.

DISPOSICIONES GENERALES DE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL APLICABLES EN EL ÁMBITO PENAL**CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES**

Artículo 51. Las disposiciones del presente Título serán aplicables a los procedimientos derivados de la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, de conformidad a lo previsto por el Código Penal de Coahuila de Zaragoza.

La reparación y compensación de los daños ocasionados al ambiente, derivada de la comisión de un delito contra el ambiente y el equilibrio ecológico, se llevarán a cabo con arreglo a lo previsto por el Capítulo II de esta ley, el Código Penal de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables.

El Ministerio Público estatal está obligado a solicitar de oficio la reparación y compensación de los daños ocasionados al ambiente.

Artículo 52. El Ejecutivo del Estado, a través de la Procuraduría y, en su caso, la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza en el ámbito de sus atribuciones, deberán desarrollar políticas integrales en materia de prevención de daños al ambiente, investigación, persecución, sanción y prevención general y especial de los delitos que los ocasionan, así como para la reinserción social de individuos penalmente responsables en materia ambiental, fomentando el respeto de las leyes ambientales y los tratados internacionales de los que México sea parte.

Artículo 53. Toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito contra el ambiente podrá denunciarlo ante las autoridades competentes. En los casos que, como resultado de sus funciones, la Secretaría o la Procuraduría tengan conocimiento de actos u omisiones que puedan constituir una conducta sancionable penalmente, formularán denuncia ante las autoridades competentes.

Artículo 54. La Procuraduría podrá ser representante de la víctima colectiva en los procedimientos que así lo requieran, dentro del cual deberá solicitar la reparación de los daños ocasionados o, en su caso, la compensación, así como la sanción económica en caso de ser procedente. Lo anterior, sin perjuicio de la coadyuvancia que pueda tener la víctima u ofendido por sí o a través de su representante legal.

La Secretaría y la Procuraduría proporcionarán los dictámenes técnicos o periciales que le requiera el Ministerio Público o las autoridades judiciales, con motivo de los procedimientos penales que se inicien por la comisión de delitos contra el ambiente o la gestión ambiental.

Artículo 55. Conforme a lo dispuesto por el párrafo quinto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considerará víctima de los delitos contra el ambiente a toda persona habitante de la comunidad posiblemente afectada por el ilícito cuando se constituya como denunciante ante el Ministerio Público estatal o federal.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se **adiciona** una fracción IV del artículo 430 y se **reforma** el artículo 432 del **Código Penal de Coahuila de Zaragoza**, para quedar como sigue:

Artículo 430 ...

...

I. a la III. ...

IV. La reparación del daño y/o compensación en los términos de la Ley de Responsabilidad Ambiental del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Artículo 432 ...

Las personas morales serán penalmente responsables por los delitos contra el ambiente y el equilibrio ecológico previstos en este Código, de conformidad con lo dispuesto en este Título, el Capítulo Décimo del Título Quinto del Libro Primero de este ordenamiento, del artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley de Responsabilidad Ambiental del Estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anterior con independencia de la responsabilidad penal en que puedan incurrir sus representantes o administradores de hecho o de derecho.

Tratándose de responsabilidad de personas morales, se cuadruplicarán los mínimos y máximos de las multas, fijados en este código para una persona física, respecto de los delitos previstos en este Título.

Las cantidades que se obtengan por concepto de las multas por la comisión de los delitos contenidos en este Título, se destinarán al Fondo Estatal de Responsabilidad Ambiental previsto en la Ley de Responsabilidad Ambiental del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Cuando uno o más de los delitos previstos en este Título sean cometidos a nombre, bajo el amparo o en beneficio de una persona moral y mediante alguna forma de intervención típica de uno o más de sus fundadores, administradores, representantes legales o miembros del consejo de administración, como consecuencia jurídica, a la persona moral se le suspenderá de seis meses a dos años del derecho para realizar la clase de actividad que motivó el delito, así como se le prohibirá obtener o celebrar de dos a cinco años, contratos, convenios, concesiones, permisos o licencias ambientales, de o con cualquier entidad oficial, estatal o municipal.

En su caso, será nula de pleno derecho la obtención o celebración de contratos, convenios, concesiones, permisos o licencias ambientales, realizadas en contravención de la sanción impuesta. Sin perjuicio de imponer las penas de quebrantamiento de sanciones previstas en el último párrafo del artículo 382 de este código, a quien, con alguna de las calidades previstas en el párrafo precedente, haya cometido o participado en el delito que dio pie a la responsabilidad de la persona moral.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los ciento ochenta días hábiles, contados a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las reformas y adiciones realizadas al Código Penal de Coahuila de Zaragoza, entrarán en vigor a los ciento ochenta días hábiles, contados a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

ARTÍCULO TERCERO.- En un plazo que no exceda de ciento ochenta días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza deberá realizar las adecuaciones necesarias a la legislación estatal.

ARTÍCULO CUARTO.- La Secretaría deberá expedir las bases y reglas de operación del Fondo Estatal de Responsabilidad Ambiental.

ARTÍCULO QUINTO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo previsto en el presente Decreto.

DADO en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los doce días del mes de noviembre del año dos mil veinte.

**DIPUTADO PRESIDENTE
MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO
(RÚBRICA)**

**DIPUTADA SECRETARIA
BLANCA EPPEN CANALES
(RÚBRICA)**

**DIPUTADA SECRETARIA
JOSEFINA GARZA BARRERA
(RÚBRICA)**

IMPRÍMASE, COMUNÍQUESE Y OBSÉRVESE
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 26 de noviembre de 2020.

**EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
ING. MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS
(RÚBRICA)**

**EL SECRETARIO DE GOBIERNO
ING. JOSÉ MARÍA FRAUSTRO SILLER
(RÚBRICA)**



EL C. ING. MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A SUS HABITANTES SABED:

QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA;

DECRETA:

NÚMERO 803.-

ÚNICO.- Se **adiciona** la fracción XIX al artículo 86 del **Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila**, para quedar como sigue:



MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS

Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza

JOSÉ MARÍA FRAUSTRO SILLER

Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial

ROBERTO OROZCO AGUIRRE

Subdirector del Periódico Oficial

De acuerdo con el artículo 90 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los servicios prestados por el Periódico Oficial del Gobierno del Estado causarán derechos conforme a la siguiente tarifa:

I. Avisos judiciales y administrativos:

1. Por cada palabra en primera o única inserción, \$2.00 (DOS PESOS 00/100 M.N.).
2. Por cada palabra en inserciones subsecuentes, \$1.50 (UN PESO 50/100 M.N.).

II. Por publicación de aviso de registro de fierro de herrar, arete o collar o cancelación de los mismos, señal de sangre o venta, \$699.00 (SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.).

III. Publicación de balances o estados financieros, \$950.00.00 (NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.).

IV. Suscripciones:

1. Por un año, \$2,601.00 (DOS MIL SEISCIENTOS Y UN PESOS 00/100 M.N.).
2. Por seis meses, \$1,301.00 (UN MIL TRESCIENTOS Y UN PESOS 00/100 M.N.).
3. Por tres meses, \$687.00 (SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.).

V. Número del día, \$28.00 (VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.).

VI. Números atrasados hasta 6 años, \$98.00 (NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.).

VII. Números atrasados de más de 6 años, \$196.00 (CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.).

VIII. Códigos, leyes, reglamentos, suplementos o ediciones de más de 24 páginas, \$350.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.).

IX. Por costo de tipografía relativa a los fierros de registro, arete o collar por cada figura, \$699.00 (SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.).

Tarifas vigentes a partir del 01 de Enero de 2020.

El Periódico Oficial se publica ordinariamente los martes y viernes, pudiéndose hacer las ediciones extraordinarias cuando el trabajo así lo amerite.

Calle Hidalgo Esquina con Reynosa No. 510 Altos, Col. República Oriente, Código Postal 25280, Saltillo, Coahuila.

Teléfono: 01 (844) 4 30 82 40

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00 horas.

Página de Internet del Gobierno de Coahuila: www.coahuila.gob.mx

Página de Internet del Periódico Oficial: periodico.sfpcocahuila.gob.mx

Correo Electrónico del Periódico Oficial: periodico.coahuiladezaragoza@outlook.es

Correo Electrónico para publicación de edictos: periodico.edictos@outlook.com

Paga Fácil Coahuila: www.pagafacil.gob.mx